

Señor(a)
JUEZ CINCUENTA Y UNO (51) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.
 E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO DE EJECUCION DE GARANTIA MOBILIARIA
SOLICITANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
EJECUTADO: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
RADICADO: 2021-0333

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN.

CAROLINA ABELLO OTALORA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. abogada en ejercicio e identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, me dirijo a usted de la manera más respetuosa con el fin de manifestarle que en virtud del artículo 318 y 320 del Código General Del Proceso, interpongo RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACION, contra el auto de fecha 23 de febrero de 2022, notificado en estado virtual No. 14 del 24 de febrero del 2022, mediante el cual decreta la suspensión del presente procedimiento, en los siguientes términos:

HECHOS

El día 09 de diciembre del 2014, se suscribió contrato de garantía mobiliaria sobre vehículo automotor entre el BANCO DAVIVIENDA S.A. (ACREEDOR GARANTIZADO) y el señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA (DEUDOR GARANTE) donde el activo objeto de la garantía mobiliaria se identifica con las placas únicas nacionales WGU806. De igual manera señor Juez la garantía mobiliaria fue debidamente registrada el doce (12) de febrero del 2015, quedando identificada con el número de folio electrónico 20150212000016100 dentro del REGISTRO NACIONAL DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.

Así mismo previo a iniciar la ejecución judicial, se registraron los correspondientes formularios de ejecución de la garantía mobiliaria cumpliendo así con el requisito exigido por la Ley 1676 de 2013 y Decreto Reglamentario 1835 de 2015. Se señala al Despacho que, el deudor garante incumplió el pago de la obligación No. 10401092058, por lo que el acreedor garantizado haciendo uso de sus facultades, ejecutó la cláusula aceleratoria inmersa en los contratos; por lo que aceleró el cobro de la obligación iniciando esta con el envío de la comunicación al deudor garante el día 21 de abril de 2021, solicitándole la entrega del vehículo dado en garantía o la normalización de la obligación, otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

Ante la negativa por parte del deudor garante, se procedió a presentar la solicitud de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria mediante el mecanismo de pago directo de conformidad al artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 y sobre el vehículo automotor de placas WGU806 el día 10 de mayo de 2021 ante la oficina de reparto de los juzgados civiles municipales de Bogotá, teniendo como resultado la designación de su despacho como el competente para conocer de la presente solicitud. El día 12 de julio del 2021 mediante providencia notificada el día 13 del mismo mes y año, se admitió la solicitud de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria de vehículo, iniciado por BANCO DAVIVIENDA S.A. contra ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, ordenando la aprehensión del vehículo de placas WGU806.

En fecha 26 de julio del 2021, el juzgado elaboro el oficio No. 0665-2021 comunicando a la autoridad competente de la orden de aprehensión sobre el vehículo automotor ya identificado, dicha comunicación fue radicada físicamente ante la autoridad competente el día 30 de septiembre del 2021 y que se anexa al final del presente escrito.

Finalmente por auto del 23 de febrero de 2022, notificado en estado virtual No. 14 del 24 de febrero del 2022 decreto: "(...) la suspensión de la solicitud de aprehensión que se tramita en este juzgado hasta tanto se tenga noticias por parte de la FUNDACION LIBORIO MEJIA sobre las resultas del proceso de negociación de deudas referencia conforme a lo establecido en el artículo 545 num. 1 del código de ritos civiles." esto comoquiera que del memorial que precede se advierte la aceptación y el inicio del procedimiento de negociación de deudas por el señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA.

ARGUMENTOS

El auto recurrido, basa su argumentación en que el deudor garante inicio y admitió un proceso de Negociación de Deudas (Ley de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante), con fundamento en el artículo 545, numeral 1º del Código General del Proceso, ante la FUNDACION LIBORIO MEJIA.

Sobre esto se trae a conocimiento del despacho lo decidido por los Juzgados Civiles Municipales ante un caso similar, radicado 2021-0490, Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá, por auto del 08 de octubre del 2021 al considerar lo reglado en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 indicando: "De la norma en cita, es claro que el presente tramite una petición de GARANTIA MOBILIARIA, donde se solicita la APREHENSION Y ENTREGA de los vehículos automotores XXXXXX y XXXXXX, mediante el mecanismo establecido en el artículo 60 de la ley 1676 de 2013 y el art. 2.2.2.4.2.3 del decreto reglamentario 1835 de 2015 denominado pago directo (GARANTÍAS MOBILIARIAS), lo que quiere decir que no es un proceso judicial, sino un trámite especial que se regula por norma especial" y sobre el numeral 1 del artículo 545 del C.G. del P., señala entre otros que "De la norma en cita, se tiene que el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, solo procede en procesos ejecutivos, conforme a lo normado en el numeral 1 de artículo 545 del CGP." resolviendo como negativa la nulidad y suspensión propuesta por el deudor garante.

Sobre el caso que se cita, se rechaza de entrada la suspensión planteada por el deudor garante contra el trámite de pago directo por parte del juzgado, pues de conformidad con lo previsto en la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, el despacho únicamente es competente para admitir el asunto a trámite y librar, en consecuencia, la orden de aprehensión del automotor(es) objeto de garantía, situación que acontece en el presente caso.

Sobre lo que hoy se discute no merece reproche, porque la Ley 1676 de 2013 se adoptó para permitir a las personas adquirir capital dando en garantía bienes muebles con los cuales, el acreedor, sin necesidad de acudir a una ejecución, puede satisfacer su crédito a través del "pago directo" previsto en el canon 60 de dicha normatividad. Sobre el alcance de la referida legislación, la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2018, anotó lo siguiente:

"(...) En la exposición de motivos se indicó que Colombia carecía de un sistema efectivo de acceso al crédito, lo cual no solo perjudicaba el crecimiento de la empresa como fuente generadora de riqueza y de empleo, sino que también afectaba a los consumidores de bienes y servicios, en la medida en que los altos costos de financiación terminaban trasladándose al precio de los bienes y servicios (...) Además, se advirtió que la ejecución era onerosa y demorada y los bienes se depreciaban, los registros eran ineficientes y los procedimientos de ejecución costosos (...) [Por tal motivo, el] legislador puso en marcha una específica forma de intervención del Estado en la economía. No pretendió fijar restricciones o racionalizar el mercado, para salvaguardar bienes ambientales u otros derechos fundamentales. Tampoco actuó estrictamente con el objeto de garantizar los atributos propios de las libertades económicas de los sujetos. Por el contrario, su objetivo fue promover el desarrollo económico, la competitividad y la productividad, así como reactivar la empresa, en particular, la micro, pequeña y mediana empresa, a partir de unas reglas modernas y un sistema efectivo para el acceso al crédito (...)"

Atinente a la naturaleza del procedimiento dirigido a la aprehensión y entrega de bienes sujetos a una garantía mobiliaria, la Sala estableció: "(...) [L]a Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, introdujo la modalidad del pago directo, consistente en la posibilidad que tiene el acreedor de satisfacer la prestación debida con el bien mueble gravado en su favor (...). Para esa finalidad, en su artículo 60 parágrafo segundo previó que "[s]i no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple

petición del acreedor garantizado, lo que corresponde armonizar con el artículo 57 ejusdem, según el cual [p]ara los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente y el numeral 7 del artículo 17 del Código General del Proceso según el cual los Jueces Civiles Municipales conocen en única instancia de todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas (...)"

22

Es claro que la petición de la entidad demandante está encaminada a la aprehensión y retención del automotor dado en garantía por el suplicante, no es un proceso ni una ejecución y, por tanto, no se predica su suspensión por el hecho de haber iniciado el gestor diligencias notariales para obtener su 'insolvencia como persona natural no comerciante'.

De conformidad con lo señalado en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los mecanismos de ejecución de las garantías mobiliarias; específicamente en la inadmisión de la demanda de inconstitucionalidad D-12386 de octubre 27 de 2017 formulada contra el artículo 60 (parcial) y el numeral segundo del artículo 62 de la ley 1676 de 2013, efectuó las siguientes consideraciones: "(...) la garantía mobiliaria nace del consenso y mutuo acuerdo entre las partes, mismo que incluye el mecanismo elegido por éstas para la ejecución de la garantía mobiliaria. Así, está en cabeza de las partes, en consideración a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la elección del mecanismo de garantía que mejor facilite su ejecución según los métodos indicados." (Corte Constitucional, 2019).

Conforme se extrae del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013, el trámite de pago directo se trata de un requerimiento o diligencia, sin que medie proceso judicial alguno, pues son las partes quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad quienes pactaron el procedimiento extrajudicial que se llevaría a cabo en caso de incumplimiento del deudor mediante la apropiación del bien otorgado en garantía, teniendo en cuenta lo anterior no resulta aplicable la suspensión de que trata el artículo 545 del C.G. del P. pues aquel se refiere a los procedimientos judiciales de carácter ejecutivo, de restitución por mora en los cánones de arrendamiento y de jurisdicción coactiva adelantados contra el deudor, situación distinta a la que aquí se presenta, pues es trámite de pago directo es un trámite eminentemente extrajudicial, limitándose la actuación del juez a verificar los presupuestos normativos y librar la orden de aprehensión sobre el bien en caso de que este se rehusó a la entrega voluntaria del mismo.

Así mismo el en parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 indica: "Si no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple petición del acreedor garantizado." Lo subrayado es por quien suscribe, a razón que esta solicitud nace a petición de la entidad solicitante como ya se ha relatado anteriormente y no se le puede endilgar como un proceso pues no se trabará Litis alguna, solo está dirigido a la aprehensión y entrega del vehículo dado en garantía, por lo que el juzgado debió denegar la solicitud de suspensión de la garantía mobiliaria por ser esta improcedente.

Al revisar la naturaleza del trámite del que emerge el presente recurso, se advierte no se trata de un proceso propiamente dicho sino de una "diligencia especial", atribuida a los jueces civiles municipales en única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 17 del estatuto procesal vigente, que establece: "(...) Los jueces civiles municipales conocen en única instancia: De todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas. (...)"

Este entendimiento, ha sido expuesto por la Corte Suprema de Justicia al dirimir conflictos de competencia suscitados entre jueces civiles municipales por la aplicación del factor territorial. En auto AC747-2018, proferido el 26 de febrero de 2018 la citada Corporación expresó:

"De otro lado, el numeral 14 ejusdem prescribe que para «la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el Juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso», lo que se trae a colación en vista que la cuestión bajo análisis no es propiamente un proceso sino una «diligencia especial», toda vez que la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, introdujo la modalidad del «pago directo», consistente en la posibilidad que tiene el acreedor de satisfacer la prestación debida con el bien mueble gravado en su favor. Para esa finalidad,

Dirección: Avenida Américas No 46-41 - Bogotá D.C. Teléfono: 7420719-2871144
ext. 14204 Notificaciones: notificaciones.unidadvehiculo@aecsa.co

en su artículo 60 párrafo segundo previó que «[s]i no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la simple petición del acreedor garantizado», lo que corresponde armonizar con el artículo 57 ejusdem, según el cual «[p]ara los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente» y el numeral 7 del artículo 17 del Código General del Proceso según el cual los Jueces Civiles Municipales conocen en única instancia de «todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas. Hasta este punto queda despejado que el procedimiento de «aprehensión y entrega del bien» está asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que «diligencias especiales», sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vacío es preciso acudir a situaciones análogas, en virtud del artículo 12 del Código General del Proceso.»

Con todo, es del caso señalar al censor, que no estamos en presencia en los preceptos descritos en el numeral 1 de artículo 545 del C.G. del P. que reza "No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor y se suspenderán los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación. El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez competente, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas." sino ante un trámite especial regulado por norma especial; específicamente el artículo 60 de la ley 1676 de 2013 y el art. 2.2.2.4.2.3 del decreto reglamentario 1835 de 2015 denominado PAGO DIRECTO, razón por la que al momento de admitir la solicitud, se verificó el cumplimiento de las exigencias establecidas por el legislador para esta clase de asuntos.

De igual forma y no menos importante, se evidencia que, la ejecución de la garantía mobiliaria se ha realizado de conformidad con el debido proceso y que la decisión que se repone en vista del artículo 545 del C.G. del P, no tiene fundamento ya que, la jurisprudencia ha mencionado en los casos de suspensión de las ejecuciones de garantía mobiliaria ÚNICAMENTE en los procesos descritos en la ley 1116 del 2006, referentes a la reorganización empresarial. En consecuencia en el escenario del trámite adelantado ante el Juez Municipal no es aplicable el régimen de suspensión del C.G. del P. por lo cual la decisión del juez de conocimiento del presente caso debió ser: negar la solicitud de suspensión propuesta por el accionante.

Reitérese, que lo aquí perseguido es la ejecución de la garantía mobiliaria constituida a favor de la entidad bancaria sobre el automotor de placa WGU806, la cual fue plenamente acreditada con el Contrato de Garantía Mobiliaria suscrito por el señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA:

PETICIÓN

1. Solicito respetuosamente a su señoría se sirva **REPONER** en su totalidad, auto de fecha 23 de febrero de 2022, notificado en estado virtual No. 14 del 24 de febrero del 2022, conforme al Artículo 318 del C.G. del P. y en consecuencia deje sin efecto dicho auto, teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas.
2. De no ser posible la reposición del auto anteriormente citado, solicito sea enviado al inmediato superior para que decida de fondo sobre el tema haciendo uso del recurso de **APELACIÓN consagrado en los artículos 320 y subsiguientes. Del C.G. DEL P.** cumpliendo así el debido proceso y control de legalidad.

Señor Juez, respetuosamente



CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.
DAVID PARDO 28/02/2022
D-MOBILIARIO C-704

RV: RECURSO DE REPOSICIÓN 2021-0333 BANCO DAVIVIENDA S.A. VS ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

24

carolina.abello911@aecs.co <carolina.abello911@aecs.co>

Lun 28/02/2022 1:53 PM

Para: Juzgado 51 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl51bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: notificaciones.unidadvehiculo@aecs.co <notificaciones.unidadvehiculo@aecs.co>

JUEZ CINCUENTA Y UNO (51) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO DE EJECUCION DE GARANTIA MOBILIARIA
SOLICITANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
EJECUTADO: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
RADICADO: 2021-0333

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN.

Por medio del presente y de conformidad con el Decreto 806 del 4 de Junio de 2020 emitido por el Gobierno Nacional, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de Junio de 2020 mediante el cual se dispone el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1 de Julio, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente y se le dé el trámite correspondiente.

De igual manera me permito manifestarle que ese correo es únicamente de salida, por lo tanto, para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remitan a los correos: carolina.abello911@aecs.co y notificaciones.unidadvehiculo@aecs.co.

Lo anterior en aras de continuar con el curso del presente proceso.

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTÁLORA
Apoderada Parte Demandante
C.C. 22.461.911 de Barranquilla.
T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.

DAVID PARDO 28/02/2022

D-MOBILIARIO C-704

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTALORA
GERENTE JURÁ DICO

Pbx. + 571 7420719
EXTENSION 14797
Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA



Conven traslado

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner AECSA en busca de virus y otros contenidos peligrosos y se considera un mail seguro.